

# Antídoto contra la desafección

La resistencia a la transparencia está (y seguirá estando) muy acendrada en la cultura organizativa de nuestros gobiernos

FERNANDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ  
 PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA



**V**ayamos o no a unas terceras elecciones en diciembre, los españoles nos hemos instalado en un malestar político sin precedentes. Hay múltiples indicadores que dan fe de esto. Si a lo largo de los casi cuarenta años de régimen constitucional la proporción de los que decían sentirse satisfechos con el funcionamiento de la democracia en nuestro país rondaba el 60 por ciento, frente a un cuarenta por ciento de insatisfechos, desde 2012 esta relación se ha invertido y ahora solo hay un treinta por ciento de satisfechos por un setenta por ciento de insatisfechos.

Como dice mi colega Mariano Torcal, de la Universidad Pompeu Fabra, la crisis iniciada en 2008 ha supuesto un test de estrés para nuestras democracias que algunos países como el nuestro han suspendido claramente. La manera de enfrentarnos a la crisis y de repartir las cargas para remontarla han hecho trizas la confianza de los españoles en su sistema político. Con los últimos datos comparados disponibles de 2013, mientras que la confianza en el parlamento nacional en la media de los países de la Unión Europea era de solo un 29 por ciento, la media de los países del sur de Europa bajaba hasta el 19 por ciento y la de España se quedaba en un pírrico 7 por ciento. Niveles similares alcanzaba la confianza en los gobiernos nacionales y aún era peor la generada por los partidos políticos, que en España es de tan solo un 5 por ciento.

Las sospechas sobre la desigualdad en el trato que reciben los ciudadanos por parte de los poderes públicos es la principal razón que explica esta quiebra de la confianza pública en las instituciones políticas. Es como si la crisis hubiera desnudado el funcionamiento real del sistema democrático en España y hubiese dejado al descubierto un sistema político que favorece siempre a unos pocos intereses poderosos frente a los de la mayoría de los ciudadanos. Lo ilustro con algunos datos más de una encuesta que hice con Manuel Villoria en diciembre pasado. Preguntados sobre qué era lo más importante para hacerse rico en España, un 55% optaba por «tener contactos y cultivarlos», frente a un 29 por ciento que decía «tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas» o un 16 por ciento que señalaba la suerte. Además, un 90 por ciento percibía que «algunas personas reciben un trato de favor de las instituciones públicas en España», el 95

por ciento señalaba que la gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el ciudadano medio, el 71 por ciento rechazaba la idea de que el sistema judicial persiga y condene a los culpables sin importar quiénes sean, o, por último, casi un 80 por ciento lamentaba que en España no se castigue la corrupción.

Un panorama como este es indudablemente terreno abonado para mensajes y partidos populistas y antisistema. La única vía para evitar el desastre es la realización de profundas reformas institucionales que transformen la dinámica de nuestro sistema político, rompan el favoritismo y la arbitrariedad con la que se aplican (o se dejan de aplicar, según convenga) las normas y lo hagan más permeable a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. En una palabra, es imprescindible mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno siguiendo el ejemplo de aquellos sistemas políticos y aquellas sociedades que han resistido el embate de esta durísima crisis con mucho más éxito que nosotros.

Una herramienta fundamental para esto, no la única, es la del Gobierno Abierto, uno de cuyos pilares fundamentales es el acceso de los ciudadanos a la información que está en poder de los gobiernos. Resulta que hoy celebráramos el Día Internacional del Derecho a Saber.

Es cierto que se han hecho algunos progresos en estos últimos años en la conquista de este derecho en nuestro país y en nuestra Región, pero sigue siendo mucho lo que todavía queda por hacer. No en vano, como decía uno de los protagonistas de aquella serie mítica de los 80 'Sí, Ministro', «gobierno» y «abierto» son términos contradictorios porque si la gente sabe lo que hacen los gobiernos también sabrá lo que hacen mal. Por consiguiente, la resistencia a la transparencia está (y seguirá estando) muy acendrada en la cultura organizativa de nuestros gobiernos. Sin embargo, la historia de las democracias nórdicas y anglosajonas demuestra que vencer esa resistencia es clave para avanzar hacia un sistema de gobierno más imparcial, más responsable hacia sus ciudadanos, más efectivo en sus políticas públicas y generador de un mayor nivel de confianza. Pero para conseguir esos objetivos y conjurar los peligros de caer en manos de quienes cuestionan la democracia liberal y la economía de mercado, hay que tomarse tales reformas en serio y no caer en la hipocresía.